



**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA  
GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

**RESOLUCIÓN NÚMERO 149265 DE 2025**

(10 de noviembre 2025)

*"Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa"*

**LA DIRECTORA DE OTRAS PRESTACIONES (E) DE LA ADMINISTRADORA DE  
LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN  
SALUD – ADRES**

En ejercicio de sus atribuciones legales, en especial las conferidas por los artículos, 114 del Decreto Ley 019 de 2012 modificado por el Decreto Ley 2106 de 2019, en desarrollo el parágrafo del artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, numeral 1º y 5º del artículo 17 del Decreto 1429 de 2016 y el numeral 2º del artículo 6º de la Resolución 1012 de 2022 y,

**CONSIDERANDO:**

**1. ANTECEDENTES**

- 1.1. Que el Director de Otras Prestaciones de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social -ADRES mediante la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024, impuso la obligación de pagar una suma líquida de dinero a la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.133.795.389, por la suma de **CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE., (\$ 14.696.201,00)**, indicando que esta suma debe ser indexada durante el periodo comprendido entre la fecha de pago de la reclamación y la fecha de expedición de dicho acto administrativo, más los intereses que se causen a partir de su firmeza y hasta la fecha de pago, con ocasión a las reclamaciones número 12301645, 12358081 generadas por el accidente de tránsito ocurrido el día 22/11/2020 en el cual se vio involucrado el vehículo de placa MHQ14A, de propiedad del obligado, automotor que para la fecha de los hechos, no contaba con una póliza de seguro obligatorio SOAT.
- 1.2. Que mediante radicado 20241221903561 del 18 de junio de 2024, se remitió citación para la notificación personal de la precitada Resolución a la dirección suministrada por parte de la IPS en el FURIPS, esto es en la CORREGIMIENTO SABANAL MONTERIA - CORDOBA, por intermedio de la empresa de correspondencia 4-72 con guía de envío RA486900985CO, sin embargo, no se obtuvo una entrega efectiva.
- 1.3. Que, en consecuencia, de lo anterior, y tal y como lo establece el artículo 68 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo esta citación permaneció fijada por el término de cinco (05) días hábiles en la página web.
- 1.4. Que posterior a esto, la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024, fue notificada por aviso publicado en la página web de la Entidad (<https://www.adres.gov.co/notificacionesadministrativas>) el 09 de mayo de 2025 y Desfijado el 15 de mayo de 2025.
- 1.5. Que la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**, a través de radicado número 20256306050942 de fecha 29 de octubre de 2025, presentó solicitud de caducidad y revocatoria directa en contra de la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024.

**2. ARGUMENTOS DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA**

Esta Dirección procede a estudiar los argumentos esbozados por la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**, en el escrito mediante el cual solicita se revoque la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024, donde señala entre otros:

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa"

"(...) Esta solicitud se presenta al amparo del artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 – Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), que permite la revocatoria directa en cualquier tiempo cuando el acto administrativo: Sea contrario a la Constitución o la ley; o Cause un agravio injustificado a una persona. 1. Violación al principio de legalidad y debido proceso El artículo 29 de la Constitución Política garantiza el derecho fundamental al debido proceso, el cual comprende el respeto de los términos legales. La expedición de un acto administrativo después de haber operado la caducidad vulnera ese principio, pues la administración pierde competencia temporal para pronunciarse sobre los hechos. 2. Desconocimiento del término de caducidad El artículo 164 del CPACA y la jurisprudencia del Consejo de Estado (Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2018, Rad. 66001-23-33-000-2014-00487- 01) han reiterado que los términos de caducidad son de orden público, perentorios e improrrogables. La ADRES carecía de competencia temporal para emitir la Resolución No. 24490 en 2024 por hechos ocurridos más de dos años atrás. 3. Agravio injustificado La decisión genera un perjuicio injustificado a mi representado, pues se le impone una obligación de pago basada en un procedimiento extemporáneo, contrario a los principios de seguridad jurídica (art. 230 CP) y confianza legítima (art. 83 CP). 4. Jurisprudencia aplicable El Consejo de Estado, en sentencia del 22 de junio de 2022, Rad. 11001-03-26-000- 2020-00055-00, sostuvo que la Administración no puede revivir términos caducados ni emitir actos fuera de su competencia temporal, so pena de nulidad por violación del debido proceso. Incompetencia temporal por operancia de la caducidad El artículo 164 del CPACA establece que los términos de caducidad son de orden público, preclusivos y de carácter imperativo, lo que significa que, una vez vencido el plazo legal para iniciar la actuación, la Administración pierde competencia temporal para pronunciarse. En el presente caso, el accidente de tránsito ocurrió el día 22 DE NOVIEMBRE DE 2022 y la ADRES solo expidió la resolución cuestionada el 18 de abril de 2024, más de dos años después del hecho generador, excediendo de manera evidente el plazo para iniciar la acción administrativa. La jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de octubre de 2018, Rad. 66001-23-33-000-2014-00487-01, ha reiterado que la caducidad "es una figura de orden público que extingue la competencia de la Administración para pronunciarse sobre los hechos cuando el término ha expirado". (...)"

En consecuencia, solicita:

"(...)1. Solicito la revocatoria directa extraordinaria, por caducidad contenida en la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024, normatividad que rige principalmente por el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) Ley 1437 de 2011, mecanismo para que la administración pública anule o modifique sus propios actos administrativos, especialmente cuando hay una clara contradicción con la Constitución o la ley, o cuando el acto causa un agravio injustificado a una persona, ya que se ha tenido Agravio injustificado: Cuando el acto causa un perjuicio injustificado a una persona. 2. Que se revoque la orden de embargo de las cuentas de ahorros especialmente la del BBVA que corresponde a la de nómina de salario dictada dentro del proceso de cobro coactivo según resolución expedida por el ADRES RESOLUCIÓN NÚMERO 24490 DE 2024 por ser contraria a la Constitución y la ley. 3. Que se suspendan las medidas cautelares mientras se decide la revocatoria directa EXTRAORDINARIA o el proceso judicial pendiente. 4. Se amparen los derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO EN VIRTUD DEL DEFECTO FACTICO NEGATIVO, derecho de defensa, principio de contradicción y de petición y demás derechos que considere pertinente. que considero vulnerados, así como la indebida notificación. (...)"

### **3. RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE**

En el presente caso, el procedimiento aplicable, es el establecido en la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - CPACA, norma vigente al momento de la expedición de la Resolución No. 24490 del 18

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa"

de abril de 2024.

#### 4. PROCEDENCIA DE LA SOLICITUD DE REVOCATORIA DIRECTA

La revocatoria directa es un mecanismo de autotutela que permite a la Administración, corregir los errores u omisiones en que hubiere incurrido en la toma de sus decisiones, y tiene origen de oficio o a solicitud de parte.

De conformidad con lo establecido en el artículo 93 de la Ley 1437 de 2011 (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo), los actos administrativos podrán ser revocados en cualquiera de los siguientes casos:

1. Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley.
2. Cuando no estén conforme con el interés público o social, o atenten contra él.
- 3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona.**

El artículo 94 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, consagra que *"la revocación directa de los actos administrativos a solicitud de parte no procederá por la causal del numeral 1º del artículo anterior, cuando el peticionario haya interpuesto los recursos de que dichos actos sean susceptibles, ni en relación con los cuales haya operado la caducidad para su control judicial."*

Ahora bien, el artículo 95 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece lo siguiente: **"Art. 95. Oportunidad.** *La revocación directa de los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, siempre que no se haya notificado auto admisorio de la demanda. (...)"*

Teniendo en cuenta que la solicitud de revocatoria directa, se fundamenta en las causales contempladas en el artículo 93 del C.P.A.C.A., concluye esta Dirección que cumple con los presupuestos procesales mínimos, razón por la cual se procederá a estudiar los argumentos planteados y a resolver de fondo tal solicitud en cuanto a la revocatoria de la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024.

En consecuencia, procederá este Despacho a revisar a petición de parte si en efecto pudo o no presentarse una causal de nulidad en el presente proceso administrativo.

#### 5. CONSIDERACIONES DE ESTA DIRECCIÓN

Sea del caso recordar, que por expresa disposición del artículo 48 de la Constitución Política, corresponde al Estado garantizar la seguridad social y la vida de sus ciudadanos. En este sentido, cuando las personas que sufran daños corporales causados en accidentes de tránsito ocurridos dentro del territorio nacional y sus respectivos beneficiarios cuando se produce el fallecimiento, tendrán derecho a los servicios y prestaciones establecidos en el artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y demás normas que lo adicionen o modifiquen, bien sea con cargo a la entidad aseguradora que hubiere expedido el SOAT, respecto de los daños causados por el vehículo automotor asegurado y descrito en la carátula de la póliza, **o con cargo a la Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES, para las víctimas de accidentes de tránsito de vehículos no asegurados o no identificados.**

Es así que, todos los establecimientos hospitalarios o clínicos y las entidades de seguridad y previsión social del sector salud, están obligados a prestar la atención médica en forma integral a las víctimas de accidentes de tránsito, considerando el grado de complejidad de la atención que requiera el accidentado y que una vez suministrada la atención médica por una clínica u hospital, éstos están facultados para cobrar directamente a la compañía aseguradora que expidió el SOAT - si el vehículo cumple con la obligación de estar amparado con la póliza de seguro obligatorio, por los costos de los servicios de salud prestados hasta por los montos de cobertura fijados por las disposiciones legales pertinentes y **al FOSYGA - Subcuenta ECAT, si el vehículo carece de póliza de seguro obligatorio SOAT, o no ha sido identificado o**

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa"

**superados los topes en lo que faltase.**

La facultad de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, según la cual se entiende subrogado para cobrar las atenciones referidas, procede en contra del propietario del vehículo que incumplió su obligación de adquirir el seguro obligatorio SOAT, de conformidad con el artículo 40 del Decreto 056 de 2015, compilado en el artículo 2.6.1.4.3.14 del Decreto 780 de 2016, vigente para accidentes ocurridos después del 3 de mayo de 2015, el cual señala:

*"Repetición. podrá repetir el pago realizado a las víctimas accidentes de tránsito, de conformidad con lo previsto en el artículo 1668 del Código Civil, el Fosyga se entiende subrogado en los derechos de quien hubiere recibido cualquier suma de la Subcuenta ECAT de dicho Fondo por concepto de pago de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo, con ocasión del incumplimiento del propietario del vehículo de la obligación de adquirir el SOAT. No obstante, la persona que conducía el vehículo no asegurado al momento del accidente será solidaria por todo concepto de responsabilidad que le asista al propietario del vehículo por cuenta del incumplimiento de la obligación de adquirir el SOAT. En estos casos, el Fosyga adelantará las acciones pertinentes contra el propietario del vehículo para la fecha del accidente, encaminadas a recuperar las sumas que haya pagado por los servicios de salud, indemnizaciones y gastos de que trata el presente Capítulo y contra el conductor si lo estima pertinente". (Lo subrayado es fuera de texto).*

Sobre el particular, es necesario reiterar, lo señalado en la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024, en el sentido de informar que, el cobro de la obligación endilgada tiene fundamento en el artículo 106 del Decreto 2106 de 2019, el cual facultó a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud - ADRES, para ordenar, mediante acto administrativo, el cobro de los créditos a su favor correspondiente a las reclamaciones reconocidas y pagadas con ocasión de los daños corporales y/o indemnización por muerte y gastos funerarios, causados en accidentes de tránsito, como consecuencia del incumplimiento **de quien ostenta la obligación de contar con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito - SOAT vigente.**

Asimismo, cuando en un accidente de tránsito se encuentre involucrado un vehículo que no cuente con Seguro Obligatorio de Tránsito vigente - SOAT, los gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización a los que haya lugar, por principio de inmediatez son asumidos por el Estado, con cargo a la **Subcuenta ECAT del entonces FOSYGA hoy ADRES**, para lo cual solo es necesario los siguientes elementos de acuerdo con la normatividad vigente:

- a) Existencia de un accidente de tránsito el cual se acredita con la declaración del médico de urgencia sobre el hecho
- b) No contar con la póliza SOAT
- c) Existencia de víctimas

Situación que se configura a cabalidad en el presente asunto conforme a los documentos que obran en el expediente de reclamaciones y que demuestran la existencia del accidente de tránsito ocasionado el día 22/11/2020 y del cual se realizó el reconocimiento y pago por concepto de gastos médicos, quirúrgicos, hospitalarios y/o indemnización, y se adelantó dentro de los términos y condiciones establecidas en el artículo 73 de la ley 1753 de 2015, dando como resultado que, la ADRES pagara las reclamaciones número 12301645, 12358081 contenidas en el acto administrativo recurrido, es por ello que se adelantó el proceso de determinación del deudor contra la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**, propietaria para la fecha del siniestro del vehículo automotor involucrado.

De otra parte, se precisa que para poder ordenar el cobro contra los **propietarios y/o conductores** cuyos vehículos se vieron involucrados en accidentes de tránsito y no tenían una póliza SOAT legal y vigente al momento de los hechos, resulta necesario el reconocimiento y pago de reclamaciones a la IPS o a las o a los beneficiarios cuando se



Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa"

presente fallecimiento conforme al artículo 193 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

Así, de conformidad con lo dispuesto en el literal A del artículo 73 de la Ley 1753 de 2015, el cual fue modificado por el artículo 152 de la Ley 2294 de 2023 se tiene que:

*"El término para efectuar reclamaciones o recobros que deban atenderse con cargo a los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud que administre la ADRES será de dieciocho (18) meses a partir de la fecha de la prestación del servicio, de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente. Finalizado dicho plazo, sin haberse presentado la reclamación o recobro, prescribirá el derecho a recibir el pago y se extingue la obligación para la ADRES o la entidad que haga las veces con cargo a los recursos del sistema."*

Es decir que, previo a desplegar las actuaciones administrativas tendientes a iniciar el cobro en contra de los obligados, las IPS deben efectuar la radicación de las reclamaciones ante la Entidad, para luego, en cumplimiento de lo preceptuado en la Resolución 1645 de 2016 y la ley 1753 de 2015, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, realiza la auditoria de las reclamaciones que son presentadas, con el propósito de validar el cumplimiento de los requisitos mínimos, y necesarios para corroborar la información del siniestro ocurrido; es por ello que, frente a las reclamaciones fundamento de la obligación que recae a nombre del obligado, esta administración realizó el respectivo trámite de auditoria una vez radicada, de la cual se constataron las condiciones necesarias y se procedió a su aprobación y posterior pago a la entidad reclamante.

Luego de concluido el trámite anterior, y teniendo en cuenta que el artículo 5 de la Ley 1066 del 29 de julio de 2006 dispone:

**"FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS.** Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario".

#### **DE LA CADUCIDAD**

Esta administradora, con el fin de hacer exigibles obligaciones, entre las que se encuentran las derivadas de las reclamaciones presentadas con ocasión a daño a terceros en accidente de tránsito que debieron ser asumidos por el Estado a través de la ADRES, mediante Resolución 037 del 19 de enero de 2018 estableció el Reglamento Interno de Cartera de la ADRES, allí se indica que luego del reconocimiento de una acreencia a favor de la Entidad que no conste en un título preexistente, se deberá constituir un título ejecutivo, resolución que ordena el cobro, el cual será ejecutado posteriormente a través del proceso de cobro coactivo reglamentado por el Estatuto Tributario, el cual inicia a partir de que se libra el respectivo mandamiento de pago.

Ahora bien, es menester tener en cuenta lo establecido por el artículo 98 de la Ley 1437 de 2011, el cual indica que las entidades públicas deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con la mentada Ley. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.

En virtud de lo expuesto, la Ley 1066 de 2006 señaló que las entidades públicas cuyas actividades o funciones impliquen el recaudo de caudales públicos tienen jurisdicción coactiva y deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor; por lo tanto es deber de las entidades públicas, establecer mediante acto administrativo de carácter general, el reglamento

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa"

interno para el recaudo de cartera, en el cual se establezcan reglas claras para la celebración de acuerdos de pago de las obligaciones existentes a favor de la entidad.

Es así, que en aras de ejercer la acción de repetición por parte de la ADRES, el inciso 4 del artículo 106 del Decreto 2106 de 2019 señaló:

"La ADRES deberá expedir, dentro de los dos (2) años siguientes al pago de la indemnización o al pago de la EPS del servicio en salud y transporte, un acto administrativo que ordenará el cobro al propietario y/o conductor del vehículo no asegurado por el SOAT y podrá hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, adelantando el procedimiento administrativo de cobro coactivo. Contra este acto administrativo únicamente procederá el recurso de reposición."

Conforme lo anterior, una vez la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES ha pagado los servicios de salud, indemnizaciones y gastos a las víctimas de accidentes de tránsito, deberá expedir un acto administrativo que ordene el respectivo reembolso por parte del propietario o conductor del vehículo que inobservó el deber de adquirir el SOAT. Será el mencionado acto administrativo que ordena el reembolso a favor de la ADRES, en el cual consta una obligación clara, expresa y exigible (artículo 99, núm.1, CPACA) el título ejecutivo que habilitará el cobro coactivo contra el propietario del vehículo o su conductor.

En ese contexto, se debe entender que la caducidad es la sanción que consagra la ley por el no ejercicio oportuno del derecho de acción, en tanto al exceder los plazos preclusivos para ello. Es decir, las normas de caducidad tienen fundamento en la seguridad jurídica que debe imperar en todo ordenamiento, en el sentido de impedir que situaciones permanezcan en el tiempo, sin que sean definidas tanto en vía administrativa como judicial. Por regla general, el momento en que inicia la contabilización de dicho término es el de la ocurrencia del hecho dañoso, pues se presume que ahí se tiene conocimiento del daño.

En el mismo sentido el Consejo de Estado<sup>1</sup> ha señalado que, se debe tener en cuenta que el plazo de caducidad de la acción de repetición contra los propietarios y/o conductores cuyos vehículos se vieron involucrados en accidentes de tránsito y no tenían una póliza SOAT legal y vigente al momento de los hechos, será de dos (2) años conforme a lo previsto en el artículo 164-2 (i) del mismo CPACA y lo dispuesto en el inciso 4 del artículo 106 del Decreto 2106 de 2019. Término que empezará a correr desde el momento en que nace el derecho de recobro en cabeza de la ADRES, que se contabiliza a partir del momento que se efectúa el giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por concepto de los servicios de salud, indemnizaciones y gastos que correspondan con ocasión del hecho dañoso.

Expuesto lo anterior, para el caso sub examine, se evidencia que la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024, que impone el pago de la obligación en contra de la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**, se expidió posterior a los dos (2) años con los que contaba la administración para poder hacerlo efectivo a través de la jurisdicción coactiva, razón por la cual, entiéndase entonces que la oportunidad para expedir el acto administrativo por parte de la ADRES, feneció como quiera que la fecha del último giro de las reclamaciones reconocidas y pagadas por la Entidad con ocasión al accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo automotor de placa MHQ14A, fue el día **02/07/2021** y la expedición del título ejecutivo fue el día **18/04/2024**; situación que a todas luces evidencia la configuración del fenómeno jurídico de la caducidad de la acción de repetición.

NUMERO DE RECLAMACIÓN	FECHA ACCIDENTE	FECHA DE PAGO DE LA RECLAMACIÓN	VALOR UNITARIO
12301645	22/11/2020	26/03/2021	\$ 14.542.328
12358081	22/11/2020	02/07/2021	\$ 153.873
VALOR TOTAL			\$14.696.201,00

<sup>1</sup> Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, C.P. Oscar Darío Amaya Navas, Número Único 11001-03-06-000-2016-00095-00;06 de septiembre de 2017.

Continuación de la Resolución: "Por medio de la cual se resuelve una solicitud de Revocatoria Directa"

En consecuencia, con el ánimo de resolver la situación administrativa y de conformidad con los argumentos y análisis jurídicos que anteceden, esta Dirección declarará la **CADUCIDAD** de la acción de repetición respecto a la obligación contenida dentro de las reclamaciones 12301645, 12358081, y como consecuencia de ello, se ordenará el archivo de la actuación administrativa adelantada en contra de la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**.

Finalmente, en aras de dar respuesta al escrito radicado con número 20256304729982 de fecha 03 de septiembre de 2025, presentado por la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**, la Dirección dará por entendido que, con la notificación de la presente resolución se da respuesta de fondo al mismo.

En mérito de lo expuesto,

**RESUELVE**

**ARTÍCULO PRIMERO. REVOCAR** la Resolución No. 24490 del 18 de abril de 2024, por las razones expuestas en la parte motiva del presente acto administrativo

**ARTÍCULO SEGUNDO. NOTIFICAR** a la señora **SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.133.795.389, el contenido de la presente resolución, conforme lo establecen los artículos 67 y siguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Destinatario	Dirección física y/o electrónica	Ciudad
<b>SANDRA MARCELA RAMOS PASTRANA</b>	cristymoronga@gmail.com	MONTERIA/CORDOBA

**ARTÍCULO TERCERO: COMUNICAR** la presente decisión a la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de Salud y a la Dirección de Gestión de Tecnologías de Información y Comunicaciones de la ADRES, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

**ARTÍCULO CUARTO: COMUNICAR** la presente decisión a la Oficina Asesora Jurídica, para que adelanten las actuaciones que correspondan en el marco de sus competencias.

**ARTÍCULO QUINTO: INDICAR** que contra la presente resolución no procede recurso alguno.

Dada en Bogotá D.C., a los (10) días del mes de noviembre de 2025.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**



Firmado Digitalmente por  
**Yasmín Escamilla B.**  
Directora (E) de Otras Prestaciones

**YASMÍN ESCAMILLA B.**  
Directora (E) de Otras Prestaciones  
Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud  
(SGSSS) – ADRES